

RE: Demanda de Casación JAIRO MELGAREJO CASTRO - 85-001-22-08-001-2015-0093-01(Ley 600)

Secretaria Tribunal Superior - Yopal - Seccional Tunja <sectsyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mar 29/06/2021 6:13 PM

Para: Javier Vicente <javierbnegro@hotmail.com>

Doctor

Javier Vicente Barragán Negro

Cordialmente acuso recibido.

Atentamente,

César Armando Ramírez López

Secretario

De: javier vicente barragan negro <javierbnegro@hotmail.com>

Enviado: lunes, 28 de junio de 2021 4:23 p. m.

Para: Secretaria Tribunal Superior - Yopal - Seccional Tunja <sectsyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: Demanda de Casación JAIRO MELGAREJO CASTRO - 85-001-22-08-001-2015-0093-01(Ley 600)

Señores

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL

Yopal Casanare

Referencia: Demanda de Casación

Condenado: **JAIRO MELGAREJO CASTRO**

Delito: Extorsión

Proceso No: 85-001-22-08-001-2015-0093-01 (Ley 600)

JAVIER VICENTE BARRAGAN NEGRO, mayor de edad, vecino de Yopal Casanare, identificado con la cédula de ciudadanía No 19.439.858 de Bogotá, abogado en ejercicio portador de la Tarjeta Profesional No. 50.841 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi condición de defensor del señor **JAIRO MELGAREJO CASTRO**, en documento archivo PDF, envié **Demande de Casación**, dejando constancia que el proceso en físico no me fue entregado, sino que me enviaron al parecer dichos documentos digitalmente en 5 archivos PDF, alguno de ellos de forma incompleta, por lo tanto, algunas situaciones no fueron plasmadas en esta demanda por esa situación.

Atte.

JAVIER VICENTE BARRAGAN NEGRO

Defensor

De: javier vicente barragan negro

Enviado: jueves, 11 de febrero de 2021 8:51 a. m.

Para: Secretaria Tribunal Superior - Yopal - Tunja <sectsyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Demanda de Casación JAIRO MELGAREJO CASTRO - 85-001-22-08-001-2015-0093-01(Ley 600)

Señores

HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Bogotá D.C.

Referencia: Demanda de Casación

Condenado: **JAIRO MELGAREJO CASTRO**

Delito: Extorsión

Proceso No: 85-001-22-08-001-2015-0093-01 (Ley 600)

JAVIER VICENTE BARRAGAN NEGRO, mayor de edad, vecino de Yopal Casanare, identificado con la cédula de ciudadanía No 19.439.858 de Bogotá, abogado en ejercicio portador de la Tarjeta Profesional No. 50.841 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi condición de defensor del señor **JAIRO MELGAREJO CASTRO**, en documento archivo PDF, envié **Demande de Casación**, dejando constancia que el

29/6/2021

Correo: Secretaria Tribunal Superior - Yopal - Seccional Tunja - Outlook

proceso en físico no me fue entregado, sino que me enviaron al parecer dichos documentos digitalmente en 5 archivos PDF, alguno de ellos de forma incompleta, por lo tanto, algunas situaciones no fueron plasmadas en esta demanda por esa situación.

Att.

JAVIER VICENTE BARRAGAN NEGRO

Defensor

Señores

HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Bogotá D.C.

Referencia: Demanda de Casación

Condenado: **JAIRO MELGAREJO CASTRO**

Delito: Extorsión

Proceso No: 85-001-22-08-001-2015-0093-01 (Ley 600)

Aprobada: Mediante Acta N° 0075 del 9 de diciembre de 2020

JAVIER VICENTE BARRAGAN NEGRO, mayor de edad, vecino de Yopal Casanare, identificado con la cédula de ciudadanía No 19.439.858 de Bogotá, abogado en ejercicio portador de la Tarjeta Profesional No. 50.841 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi condición de defensor del señor **JAIRO MELGAREJO CASTRO**, de calidades y condiciones conocidas en la causa en la referencia, en forma atenta acudo a su Despacho a efecto de presentar **Demanda de Casación** contra la Sentencia proferida por el Tribunal Superior de Distrito de Yopal Sala Única de Decisión, en **providencia del 09 de diciembre de 2020**, mediante el cual se **confirma íntegramente el fallo del 19 de julio de 2019 proferida por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Yopal**, en la que declara penalmente responsable a **JAIRO MELGAREJO CASTRO** condenándolo a **96 meses de prisión** como autor responsable de delito de **extorsión** y una pena accesoria de inhabilitación del ejercicio del derecho y funciones pública por un término igual al de la pena principal; no le otorgo la suspensión de la ejecución de la pena ni la prisión domiciliaria.

Como consecuencia de la casación del fallo, si la H. Corte lo estima procedente, deberá proferirse sentencia de sustitución o de reemplazo en la que se absuelva del cargo imputado al señor **JAIRO MELGAREJO CASTRO**.

I. IDENTIFICACIÓN DE LOS SUJETOS PROCESALES.

- 1.1. Son sujetos procesales: En su condición de procesado y condenado el señor **JAIRO MELGAREJO CASTRO**, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía N° 17.313.217 expedida en Villavicencio Meta.
- 1.2. Fiscal 3 Especializada de Yopal Casanare, representado por el Doctor **ALEJANDRO ADOLFO LLANOS ARBOLEDA** y/o quien haga sus veces.
- 1.3. La defensa: por quien firma Doctor **JAVIER VICENTE BARRAGAN NEGRO**.

II. SENTENCIA IMPUGNADA:

- 2.1. Se trata de la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal, Sala Única de Decisión, de fecha 9 de diciembre de 2020, dentro de la causa No. 85-001-22-08-001-2015-0093-01 (Ley 600), con ponencia del Dr. JAIRO ARMANDO GONZÁLEZ GÓMEZ, por medio de la cual se resolvió:

"...PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de fecha julio diecinueve (19) del dos mil diecinueve..".

III. HECHOS:

- 3.1. Se extractan de la sentencia impugnada, proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal, Sala Única de Decisión, de la siguiente manera:

"...La Fiscalía General de la Nación a través de su delegada Fiscalía Tercera Especializada de esta ciudad, manifiesta que la presente investigación, se dirige en particular por la denuncia instaurada por el ciudadano ELMER GONZALEZ VELA, donde coloca en conocimiento de las autoridades, que entre los años 2000 y 2004, fue víctima de varias extorsiones por parte de las Autodefensa Campesinas de Casanare, entregando el dinero a los alias BOINA y GRILLO, quienes, según el primero, cada final de mes debían entregar el dinero al jefe de finanzas, al hoy procesado JAIRO MELGAREJO CASTRO..."

IV. ACTUACIÓN PROCESAL:

- 4.1. La Fiscalía General de la Nación (a folio 5 C.O N.1), compulsan copias de la versión libre rendida por los señores **YAIR MADRIGAL QUINTERO y JHON JAIRO SANCHEZ ROA**, que rindieran el día 10 y 11 de noviembre de 2011, quienes son postulados de Justicia y Paz.

- 4.2. El día 20 de diciembre de 2013, la fiscalía abre investigación penal en contra del señor **JAIRO MELGAREJO CASTRO** y otras personas por el delito de extorsión, librándole orden de captura. (folio 19 C.O N.1).
- 4.3. El 29 de agosto de 2011, se recibe denuncia penal al señor **ELMER GONZÁLEZ VERA**.
- 4.4. El 15 de junio de 2014, fue capturado el señor **JAIRO MELGAREJO CASTRO**, poniéndolo a disposición de la Fiscalía Tercera Especializada de Yopal Casanare.
- 4.5. El 16 de junio de 2014, se escucha en indagatoria al señor **JAIRO MELGAREJO CASTRO**.
- 4.6. El 19 de junio de 2014, se impone medida de aseguramiento de detención preventiva en contra del señor **JAIRO MELGAREJO CASTRO**.
- 4.7. El 4 de septiembre de 2014, la Fiscalía ordena una serie de pruebas.
- 4.8. En auto del 29 de septiembre de 2014, la fiscalía declaro el cierre parcial de la investigación respecto del señor **JAIRO MELGAREJO CASTRO**.
- 4.9. Del auto anterior, el indagado **JAIRO MELGAREJO CASTRO**, por estar privado de la libertad, fue notificado el día 30 de noviembre de 2014; el Ministerio Público se notificó el 15 de octubre de 2014; la defensa, se notificó el día 3 de octubre de 2014, interponiendo el recurso de reposición contra el auto de cierre; se corrió traslado de ese recurso los días 21 y 22 de octubre de 2014.
- 4.10. El auto de cierre de la investigación, nunca se notificó por estado.
- 4.11. El 6 de noviembre del año 2014, la Fiscalía Tercera Delegada, no revoca la Resolución de cierre contra el aquí indagado.
- 4.12. El día 12 de diciembre de 2014, la Fiscalía califica el mérito del sumario, profiriendo Resolución de Acusación.
- 4.13. El 10 de marzo del 2015, el Juzgado Único del Circuito Especializado de Yopal Casanare, avoca conocimiento y corre traslado de conformidad con el Art. 40 (Ley 600).
- 4.14. El día 21 de julio de 2015, se desarrolla la audiencia preparatoria, se decretan pruebas solicitadas por la defensa, único sujeto procesal que pidió pruebas.
- 4.15. El juicio oral, se inició en sesiones del 30 de noviembre de 2015, 8 febrero de 2016, 26 de mayo de 2016 y 1 de noviembre del año 2016.
- 4.16. El 19 de julio de 2019, el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Yopal (Casanare), profiere sentencia de primera instancia, por medio de la cual se condena a **JAIRO MELGAREJO CASTRO** a 96 meses de prisión como autor responsable del delito de Extorsión y una pena accesoria de inhabilitación del ejercicio del derecho y funciones pública por un término igual al de la pena principal.
- 4.17. Apelado el anterior fallo por la defensa, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal, Sala Única de Decisión, mediante sentencia de fecha 09 de diciembre de 2020, con ponencia del Dr. **Jairo Armando González Gómez**, por medio de la cual se resolvió: *"...PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia impugnada, de fecha julio diecinueve (19) de dos mil diecinueve..."*.

V. CAUSALES INVOCADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

5.1. CARGO PRIMERO

El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Yopal Casanare, en su decisión, incurrió en un **falso juicio de existencia por omisión**, al no considerar en la sentencia las declaraciones o testimonios de los señores:

- 5.1.1. El Tribunal en su fallo, no aprecio en su integridad la prueba testimonial del señor **JOSÉ RAMIRO MECHE MENDIVELSO**, la cual fue aportada en forma legal a este proceso, este testigo acepta que perteneció a las ACC, luego de narrar (folio 230 c.o.2), su

trasegar dentro del grupo ilegal, refiere que fue comandante del grupo de las ACC y menciona dentro de sus estructura a comandantes como Jaime Matis, Héctor Buitrago, Llanero, Boyaco Miguel, Fredy Machado, Michima, LAMBADA entre otros, respecto de los alias Boina y Grillo, señala que conoce a Grillo, porque le dio curso y fue vinculado a una contraguerrilla en el Meta y que en un combate que hubo con la guerrilla este salió herido, dentro del traslado que de forma virtual me hiciera el Tribunal no aparece el contenido de los folios 243 y 244 del c.o. 2, sin embargo, es claro en señalar que el señor MELGAREJO CASTRO nunca perteneció a ese grupo ilegal, que únicamente se encontró una vez con él en una finca de propiedad de la familia.

- 5.1.2. El tribunal desconoce el contenido del testimonio del señor **CARLOS GUZMÁN DAZA**, lo ignora, no es un testigo insular sino directo, el acepto y por eso fue condenado como miembro de ese grupo irregular, menciona respecto de su estructura la existencia de un estado mayor, que integraba el señor Héctor Buitrago y sus dos hijos Martin Llanos y el conocido como caballo, menciona una serie de miembros de esa organización y la forma como operaba, que conoció a mucha gente, habla de una cifra de aproximadamente 4.000 integrantes, respecto del señor **JAIRO MELGAREJO** señala lo siguiente: *"...si lo conozco porque él es una persona conocida en el Municipio de Monterrey, no he tenido negocios con él o digamos alguna vinculación, pero si lo conozco de vista como un ganadero de la región, sé que la trayectoria de su familia es también de vocación ganadera campesina, con respecto a si lo haya visto militando, en el grupo que yo milite, de las autodefensas, categóricamente le digo a esta audiencia que nunca lo vi desempeñando funciones o en esa condición en el tiempo que yo estuve..."*, (folio 233 a 237 c.o.2.).

El Tribunal desconoce dentro de los que nos interesa, esta prueba testimonial que fue legalmente aportada en el proceso en su análisis, en su contenido, en la que el fallador tergiversa de forma intencionada el valor probatorio dentro los criterios de la sana crítica y la experiencia, lo que conduce a evidenciar la ilegalidad de esta sentencia.

- 5.1.3. Desconocimiento del fallo, proferido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Monterrey Casanare, visto a folio 256 y ss, mediante el cual fue absuelto el señor **JAIRO MELGAREJO CASTRO** por el delito de concierto para delinquir y/o sedición, dentro de la causa N° 2007-0175, El Tribunal ha incurrido en una violación indirecta de la Ley sustancial, que se puede catalogar como error de hecho, desconoce la existencia de esta prueba, la cual fue aducida en forma legal, no hubo oposición de la fiscalía o por otro sujeto procesal, esta decisión es muy clara, en determinar la no responsabilidad del señor **MELGAREJO CASTRO** como presunto miembro de las ACC, el Tribunal da como hecho, según sus deducción o suposiciones, que este pertenecía a dicho grupo ilegal, es tan de bulto, que el mismo fallador carece de demostración por el simple hecho que los desmovilizados que nunca fueron escuchados ni ratificados en sus versiones, lo mencionan tangencialmente (**Boina y Grillo**), el Juzgado dentro de los argumentos que expuso, señala *"... Pretende la fiscalía mediante la resolución obtener una sentencia condenatoria a pesar de observarse que no hay la suficiente prueba intangible, coherente y veraz, que abra paso a la certeza de la responsabilidad en cabeza del sindicado. Se repite, la prueba de cargo no se cotejó de manera certera a efectos de tomar decisión contraria a la pedida por la defensa en favor del acusado. Distinta decisión habría de tomarse si se hubiere demostrado eficazmente que JAIRO es o hubiese sido integrante de tal organización armada ilegal, en calidad de jefe de finanzas, testaferro, reclutador de jóvenes y colaborar de una u otra manera. Y es claro que, para poder condenar, el dicho de los testigos acompañado de las pruebas documentales y de los demás elementos de juicio que se le presenten al Juez deben ser precisos en señalar la responsabilidad de quien es procesado, es decir, deben controvertir en graso sumo, las exculpaciones ofrecidas tanto por la defensa como por el acusado..."*, esto son entre otros argumentos que expuso el Juez para llegar a la conclusión firme y certera que el señor **JAIRO MELGAREJO CASTRO** no fue integrante de las ACC, este fallo fue controvertido por parte de los sujetos procesales entre ellos la Fiscalía, hizo tránsito a cosa juzgada

(folio 256 a 269 C.O. N.1), cobrando ejecutoria el día 27 de noviembre del año 2009, fue aportada en forma legal, nunca fue objetada, fue pedida dentro del traslado del Art. 400 (ley 600), decretada por el Juez y con extrañeza el Tribunal, en su fallo la desconoce totalmente, la ignora, es decir, se da la causal aquí invocada en este cargo.

- 5.1.4. Desconocimiento del fallo del Tribunal Administrativo de Casanare, por privación injusta de la libertad, proferida en razón a que el Juzgado Promiscuo del Circuito de Monterrey Casanare, declaro la absolución el 30 de octubre de 2009, fue condenada la Nación (Fiscalía General de la Nación y Rama Judicial) por ese error judicial, siendo indemnizado causado los por perjuicio morales, materiales y daño en la vida en relación, cobrando ejecutoria el 4 de febrero de 2015; frente a la valoración y conclusiones probatorias la decisión del Tribunal Administrativo analizando el caso en concreto, tuvo en cuenta los antecedentes de la captura, los fundamentos probatorios de la medida de aseguramiento, las razones por las cuales fue revocada, considerando que hubo ilegalidad en la medida de aseguramiento, de su captura y como lo observo el Juez penal, no existió certeza absoluta sobre la comisión de la conducta punible concierto para delinquir y/o sedición, considerando que en materia penal, no existió el más mínimo de asomo para declarar su no responsabilidad, indicando también, que la Fiscalía se precipito en acoger versiones de personas desmovilizadas de las autodefensas y las imputación hechas en contra de mi mandante, las particularidades de sus dichos y el actuar real del imputado, por eso deviene que su privación de la libertad fue injusta y desproporcionada entre otros argumentos, por esa razón dentro de los extractos tomados del fallo, condenan a la Nación por una responsabilidad objetiva, Art. 93 de la Carta Política.
- 5.1.5. Es tan vacío, especulativo los argumentos de la decisión aquí atacada, que contrario a las decisiones anteriores, el Tribunal presume que el señor Melgarejo Castro, sin probar, omitiendo la decisión del Tribunal Administrativo, da como hecho cierto, que este perteneció al grupo irregular de las ACC, tan errada afirmación dice lo siguiente **"...hay varias personas que lo ubican en el grupo criminal, con el mismo alias y siempre como manejador de las finanzas..."**. El desconocimiento u omisión por este falso juicio de existencia, el Tribunal está incurriendo en una violación indirecta de la Ley sustancial, ya que intencionalmente ignora o desconoce la existencia de esta prueba, dando por establecido un hecho de supuesta pertenencia del señor MELGAREJO CASTRO a ese grupo irregular, en primer lugar, carece de demostración probatoria y en segundo lugar, esa prueba trasladada del fallo administrativo la omite, la ignora, siendo esta de un valor trascendental, ya que se aportó legalmente; de su análisis, su contenido que hace parte del expediente, desmiente totalmente la fundamentación que hace el Tribunal, que por arte de magia dice **"...que este formaba parte de las dirigencias de las ACC..."**, es un racionamiento ilógico, traídos de los cabellos, donde se evidencia la ilegalidad de esta sentencia, donde el Tribunal Administrativo para hallar la responsabilidad del Estado, por la privación injusta, que tuvo que padecer mi mandante y reiterada por el Consejo de Estado, según las reglas de la experiencia y la sana crítica, los testigos de cargo ofrecían en sus versiones un alto contenido de inconsistencias, que lo llevaron a la duda probatoria, siéndole ajeno al fallador o al Tribunal, es decir, tanto la sentencia de primera y segunda instancia, no hubo análisis, una omisión integral, dejo de hacerlo, ni siquiera se menciona (folios 224 a 250 c.o.1).
- 5.1.6. Desconocimiento de los fallos proferidos dentro de los radicados números 115511, 115512, 114930, 114981, 114983, 114984, 114985, 114987, 114988 y 114992, emitidos por la Fiscalía Sexta Especializada de Yopal Casanare, los cuales se encuentran debidamente ejecutoriados, el Tribunal incurre en un falso juicio de existencia por omisión, al no considerar en la sentencia, estas pruebas trasladadas de procesos casi que iguales o idénticos al que aquí está respondiendo mi mandante, es decir, no hubo una apreciación integral de estos medios allegados al expediente, de forma oportuna y dentro de los términos legales, no han sido mencionados y son pruebas fundamentales, en la que se estructura la no responsabilidad del señor MELGAREJO

CASTRO, es tan vaga la apreciación que hace el Tribunal y el cercenamiento que hace del mismo que escuetamente dice lo siguiente "... *existen igualmente copias de otras actuaciones, en denuncias formuladas por HECTOR ARSENIO PIRABAN PEÑA, MARIA URSULA PADILLA DE PEREZ, NESTOR FONSECA PEREZ, FIDEL RIVERA TAPIAS, FIDEL NAPOLEON CORREDOR RIAÑO, RAUL GONZALEZ DUARTE, LUIS NOEL GONZALEZ, LUIS FERNANDO GALAN NOSSA, JUAN ALBERTO ORTIZ CERON Y JOSE HUMBERTO CUELLAR GARZON, en las cuales, a pesar de ser favorecidos con las decisiones, el modus operandi es exactamente el mismo y figuran como autores materiales los alias GRILLO y BOINA, y se menciona a MELGAREJO precisamente con el mismo alias, 28, y en la misma área: finanzas...*", este argumento dentro del material probatorio carece de demostración, el Tribunal no hizo referencia a que los mismos sujetos alias Boina y Grillo, son los mismos que en estas diez causas penales, pretenden comprometer la responsabilidad del señor MELGAREJO CASTRO, en la decisión del ad-quo y el Tribunal, jamás hicieron análisis del contenido, ni del fundamento factico que expuso el fiscal, para abstener de proferirle medida de aseguramiento, es un cercenamiento intencional, bajo un argumentación tan falsa que da perplejidad que esa instancia, suponga hechos que carecen de demostración, en las decisiones por la cual la fiscalía considera que no existen indicios graves de responsabilidad, manifiesta que los señores denunciante de los radicados antes mencionados, fueron objeto de extorsión, para los años 2000 a 2005 por parte de las ACC, para constreñirlos a entregar dineros por cada cabeza de ganado y por hectárea de tierra y que esos dineros fueron entregados a los alias Grillo (John Jairo Sánchez Roa) y Boina (Jair Madrigal Quintero), esas versiones de estos 2 sujetos, quienes fueron postulados a Justicia y Paz dentro de su proceso de reincorporación a la vida civil, fue el motivo para abrir investigación; dentro de la valoración probatoria, que efectuó el ente acusador, considero lo siguiente: "...*Como consecuencia de lo anterior, el acervo probatorio hasta ahora recaudado, no compromete seriamente la responsabilidad del vinculado, toda vez que no se cuenta con los dos indicios que pregonan la norma penal, pues del escaso material probatorio, no se puede endilgar responsabilidad al señor MELGAREJO CASTRO, pues si bien la conducta es típica, antijurídica y culpable, no tenemos esos dos indicios contingentes en contra del señor JAIRO MELGAREJO CASTRO, que nos permita atribuirle la autoría o coautoría de los hechos denunciados.... Lo anterior si tenemos en cuenta que desde el años dos mil nueve el hoy indagado JAIRO MELGAREJO CASTRO ante la Fiscalía Especializada de Santa Rosa de Viterbo expuso y denunció bajo la gravedad de juramento de las intenciones de los declarantes de cargos dentro de las actuales diligencias JHON JAIRO SANCHEZ ROA alias "GRILLO" y JAIR MADRIGAL QUINTERO "BOINA", quienes les habían exigido el pago de la suma de ocho millones de pesos a cambio de no ser involucrado dentro de sus declaraciones como partícipes de sus actividades ilícitas dentro de las autodefensa campesinas del Casanare, y donde es, precisamente como a la postre se dan los señalamientos como los advirtiera el hoy indagado; por lo cual en los actuales momentos procesales, y sin temor a equívocos, estamos ante la ausencia de presencia de indicios de responsabilidad penal en cabeza de MELGAREJO CASTRO...*" (folio 270 a 300 c.o.1). Estos son los fundamentos que expone el mismo fiscal que adelanta la investigación de esta causa objeto de este recurso extraordinario, en la que se abstuvo de imponer medida de aseguramiento, que desembocó posterior que la Fiscalía precluyera la investigación, por la totalidad de estos hechos y radicados, donde se aflora la duda, cercenamiento total que hace el Tribunal, donde se denota que no hubo una apreciación integral, no hubo análisis de ese contenido, claramente se degrada su participación y los actos ejecutados, si analizamos el contenido de la prueba y el fallo, podemos evidenciar de forma clara y contundente, que la sentencia de segunda instancia, jamás hizo un análisis del contenido factico de estas pruebas o estas investigaciones, que fueron echadas de menos y por lo tanto, claramente incurrió en un falso juicio de existencia por omisión.

De contera se observa, que esta causal por falso juicio de existencia, violación directa de la Ley sustancial por un claro error de hecho, el Tribunal ha ignorado y desconocido, la existencia de las anteriores pruebas o dar por establecido un hecho que carece de demostración, como que el señor **JAIRO MELGAREJO CASTRO**, perteneció al grupo irregular

de las ACC, ignoro las sentencias del Juez Promiscuo del Circuito de Monterrey Casanare e incluso la del Tribunal Administrativo de Casanare, en el cual, lo favoreció al declarar su no culpabilidad, como también, la prueba testimonial, estos medios probatorio crean un nexo inescindible, que dentro del análisis de su contenido que se expuso anteriormente dentro del conjunto del material probatorio, evidencian la ilegalidad de la sentencia que se basa netamente en meras conjeturas por parte del Juez y el Tribunal.

Del análisis claramente podemos establecer la inexistencia de la omisión probatoria en los fallos de primera y segunda instancia, ya que estos se rigen por el principio de la unidad jurídica, en la que el Tribunal confirmo integralmente esta sentencia, no confronto en la sentencia con la prueba echada de menos, lo que se traduce que este cargo debe prosperar, para que la Corte Suprema de Justicia, lo declare.

5.2. CARGO SEGUNDO

El Tribunal, en su decisión, incurrió en un **error de derecho por falso juicio de legalidad**, contenido en el numeral 1 ya que proviene de un error de hecho, esta se funda en un traslado de una compulsa de copias que dio inicio al sumario 114979 de la Fiscalía de los testimonios de los postulados YAIR MADRIGAL QUINTERO y JHON JAIRO SANCHEZ ROA, contenidas en el informe de policía, (folio 5 o 7 c.o.1), en la que claramente, ese traslado de esas pruebas se tornan ilegales, ya que dentro de este plenario no tuvo la oportunidad la defensa, de que los testigos de cargo, se ratificaran o fueran objeto de un contrainterrogatorio, (folio 11 y 13 c.o.1), firmado por el Fiscal Juan Carlos López Goyeneche, ninguno de estos testimonios fueron recibidos directamente por el fiscal instructor que tuvo a cargo la investigación en contra del señor JAIRO MELGAREJO CASTRO, la incorporación de este informe, sirvió de base o de fundamento para abrir investigación, llamar a indagatoria, formular resolución de acusación y proferir condena en las instancias. Tales pruebas o la información contenida en ellas, nunca fueron ratificadas después de haberse incorporado a la actuación penal seguido en contra del señor MELGAREJO CASTRO.

La transcripción o compulsas de copias, estas hicieron parte de un juicio que contra los procesados JAIR MADRIGAL QUINTERO alias Boina y JHON JAIRO SANCHEZ ROA alias Grillo, rindieron en versión libre el día 10 de noviembre del año 2011, esta prueba trasladada así como la incorporo a esta causa la fiscalía, no puede producir efectos jurídicos, ya que se allego ilegalmente, lo genera un cambio radical en la conclusión de los fallos de instancias y es así que ese presunto medio probatorio corresponde a un informe de policía judicial, esa compulsa de copias en la que había necesidad, que la información que dieron esos procesados MADRIGAL QUINTERO y SANCHEZ ROA, tenían que ser verificadas o llamarlos a rendir testimonio, para ampliar hechos, circunstancias precisas de los hechos investigados, frente a la duda por lo fragmentario de la información, como también hacer la oposición en un contrainterrogatorio por los sujetos procesales, a través de la investigación e incluso en el juicio.

Así las cosas, el Art. 314 de la Ley 600, ha sido claro en señalar acerca de los informes de policía judicial, que surgen de las labores previas de verificación, dentro de las funciones están, escuchar en exposición o entrevista a los que consideren que pueden tener conocimiento de la posible comisión de una conducta punible, estas labores no tienen valor de testimonio ni de indicios, solo pueden servir como criterios orientadores de la investigación.

Estas exposiciones como en el caso en concreto, que fueron recibidas fragmentariamente de otras, como es la compulsa de copias, que se surtió de versiones libres ante la Unidad de Fiscalías para la Justicia y la Paz, no tienen valor de testimonio, ni de indicios, y como lo señala la jurisprudencia, solo podrán servir como criterio orientador de la investigación.

Vale destacar, que dicho informe denominado compulsa de copias, contiene un resumen de las versiones dadas por MADRIGAL QUINTERO alias Boina y SANCHEZ ROA alias Grillo, en la que los postulados a Justicia y Paz como miembros de la organización de Martin Llanos, al parecer cobraban extorsiones de las autodefensa, por órdenes directas de quien se hacía

llamar Martin Llanos y en la que se menciona "al comandante alias 28, que es el señor JAIRO MELGAREJO CASTRO", una transcripción fragmentada por Jhon Jairo Sánchez que figura del pago de esa extorsión al aquí denunciante sin que mencione a mi mandante; estas exposiciones la Corte les ha dado la connotación de simples informes: sin valor probatorio (CSJ. 25 de mayo de 1999 – Radicado 12885), se agrava lo anterior, que este informe nunca fue ratificado, ni con la declaración del funcionario respectivo, ni siquiera de los mencionados MADRIGAL QUINTERO y SANCHEZ ROA.

La Corte en concreto ha señalado que frente a los informes que se limitan a aportar grabaciones y/o transcripciones como en este caso sucede, que ni es prueba documental, sino que esta tiene el criterio orientador de la investigación, no contiene más que conclusiones o resúmenes sobre los análisis hechos al contenido de las mismas, que en este caso se limitó únicamente a transcribir un fragmento de una versión dada en Justicia y Paz de MADRIGAL QUINTERO y SANCHEZ ROA, así como fueron incorporados a este proceso, no pueden tener valor probatorio, ya que en el caso en concreto, esta únicamente contiene más que conclusiones o una transcripción deshilvanada de una información dada por los anteriores y como tal, en los términos del Art. 316 de la Ley 600, los informes que rinda policía judicial, no son medios probatorios, ya que estos solo sirven para buscar nuevas pruebas o lograr su autorización, más no como evidencia de la responsabilidad penal de la persona implicada (CSJ SP 7830- 2017, Rad 46165).

En el caso en concreto, la condena se fundó en lo que el fallador denominó compulsas de copias de versión libre rendidas por los mencionados MADRIGAL QUINTERO alias Boina y SANCHEZ ROA alias Grillo, que no tienen la condición de documento, sino, escasamente de criterio orientador, por cuanto corresponde a la transcripción de unas grabaciones que estos rindieran ante un proceso de Justicia y Paz, por haber sido postulados, su veracidad está en discusión, en la medida que se desconoce, si lo ahí consignado equivale a lo expresado por los interlocutores, o a lo que subjetivamente pudieran haber plasmado policía judicial o el fiscal

Estas situaciones en garantía al principio de legalidad, estos debieron haber sido llamados a rendir testimonio, lo que nunca le intereso a la Fiscalía, ni a los falladores de instancias, conforme lo señala el Art. 266 de la Ley 600 y su práctica debió de haberse sujetado a las reglas del Art. 276, es decir, debió haberse juramentado, incluso sujeto a contrainterrogatorio. Ya sea en la etapa de investigación o de juicio, se agrava lo anterior, que esta compulsas de copias, nunca fue ratificada de manera directa y/o personal.

Es claro, que emerge dentro de este proceso la existencia de una tarifa legal negativa, que impide analizar el informe de compulsas de copias, ya que se configura el vicio alegado por la vía de la violación indirecta de la norma sustancial, ya que este no debió de haberse tenido en cuenta, ni por el Tribunal ni por el Juez Ad-Quo, como fundamento probatorio en la condena contra **JAIRO MELGAREJO CASTRO**, más en la medida que este constituyó la única prueba de responsabilidad del delito de extorsión, por lo cual se debe casar esta sentencia con la declaración de absolución del procesado en el punible endilgado.

El informe fragmentario, es el único referente probatorio en el que sea fundamentado el juicio de responsabilidad en contra de mi mandante, se agrava lo anterior, que estos ni siquiera lo ratificaron y la reflexión de la Corte que se está planteando, es visibilizar este yerro; el informe que se está atacando de las compulsas de copias (folio 5 al 7 C.O. N.1), corresponde a un mero extracto de unas grabaciones, cuya veracidad se encuentra por completo en entredicho, con el agravante, que los registros auditivos y sus transliteraciones son confusos, inaudibles por lo cual es imposible tener certeza de que lo registrado por los funcionarios de policía judicial o el fiscal, es fiel, lo que transcribieron (folio 7-9, c.o.1), lo que implica que los falladores de instancias para soportar su condena estén en el campo de las conjeturas, suposiciones o apreciaciones inverosímiles.

Así, el Art. 232 de la Ley 600/2000 constituye un desarrollo de la regla de exclusión, en la medida que impone la obligación al funcionario judicial de fundar sus providencias en prueba legal, regular y oportunamente allegadas a la actuación.

Lo deseable, de este modo, es que, el ejercicio de valoración probatoria esté precedido de un examen de licitud y legalidad en términos de producción y aducción respecto de cada elemento de conocimiento primario o subsidiario de tal suerte que, solamente, aquellos que superen ese escrutinio puedan ser objeto de análisis judicial.

Se pretende dar valor testimonial a las transcripciones fragmentadas e inaudibles, dadas por MADRIGAL QUINTERO y SANCHEZ ROA, claramente son informe de policía judicial, que nunca fueron ratificadas, ni siquiera como prueba trasladada, es decir, no pueden producir efectos jurídicos en esta causa contra el señor **JAIRO MELGAREJO CASTRO**, por lo tanto, se torna ilegal, no se cumplen los requisitos del Art. 239 de la ley 600/2000, donde a las luces de la ley 906, es un clara prueba de referencia (Art. 437 y SS), el traslado de prueba en este evento no es válido, ni se cumplió con lo exigido en la Ley penal Colombiana, que como presupuesto de validez de la prueba, debe ser ratificada y en este evento incluso, haberle tomado testimonio a los informantes; por lo tanto, eso torna en ilegal y el cargo debe prosperar.

5.3. CARGO TERCERO

El Tribunal, en su decisión, incurrió en una **violación indirecta por inaplicación del in dubio pro reo**, como se ha expresado en los anteriores cargos referidos, las consideraciones expresada en el fallo por parte del Tribunal, algunas pruebas no fueron tenidas en cuenta, como se dijo anteriormente, otras fueron tergiversadas en su contenido, a saber, cuando afirma lo siguientes: "... *No obstante, a pesar de no ser la decisión muy explícita al respecto, queda claro que a MELGAREJO, no se le está juzgando como auto material, sino como la persona que, por ser integrante de las conocidas ACC y específicamente en el área de finanzas, determinó que la extorsión se realizara... por ser esta la única figura que permite atribuir responsabilidad a quienes ostentan alguna posición de mando en una determinada organización criminal y que no comenten los delitos de manera propia o ni siquiera los ordenan directamente, pues generalmente no tienen injerencia o trato directo con los autores materiales. Por eso las afirmaciones que en tal sentido se hacen en el recurso, carecen de connotación jurídica...*". Como se puede observar, estas pruebas se valoraron con violación de las reglas de la sana crítica, se le está endilgando un delito por el cual nunca fue acusado, como es el de concierto para delinquir, que incluso, desconoce el fallo absolutorio del 9 de septiembre del año 2009, proferido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Monterrey Casanare, es tan pobre su argumentación que concluye "...*El hecho de que a pesar de estos señalamientos el Juzgado Promiscuo del Circuito de Monterrey lo hubiera absuelto, no es una camisa de fuerza para concluir que MELGAREJO no formó parte de las autodefensa...*".

Se agrava lo anterior, que dentro de las diligencias que fueron incorporadas como prueba trasladada de diez investigaciones, parecidas a esta causa, la deducción simplista del Tribunal es la siguiente: "...*existen igualmente copias de otras actuaciones, en denuncias formuladas... en las cuales, a pesar de ser favorecidos con las decisiones, el modus operandi es exactamente el mismo y figuran como autores materiales los alias GRILLO y BOINA, y se menciona a MELGAREJO precisamente con el mismo alias, 28, y en la misma área: finanzas...*". Este soporte que expone el Tribunal, lo que comento anteriormente, no es insular como lo pretende ver, está soportado en meras conjeturas y esta situación no puede producir efectos jurídicos, se aflora la duda, es tan absurda la posición del Tribunal, como incluso, tergiversa y pone en un plano totalmente contra las reglas de la experiencia, al dar afirmaciones como las siguientes "...*Por el contrario, los elementos aportado de pruebas trasladadas, incluso documentos aportados por el mismo, muestran que no era así...*", me pregunto, ¿qué tipo de pruebas es la que señala el Tribunal? que no las menciona, no es claro frente a la prueba trasladada en todo su contenido, no bajo una interpretación sesgada como la que da, sino integral y armónica, porque no le interesa, hacer esas deducciones especulativas, sobre el todo integral que desmienten esa posición, agravando lo anterior como la siguiente "...*Hay varias personas que lo ubican el grupo criminal, con el mismo alias y siempre como manejador de las finanzas...*", si hay

un hecho claro que sobre esa situación fáctica que plantea el Tribunal y que fue discutido, analizado, por el Juez Promiscuo del Circuito de Monterrey Casanare, que valoro y aprecio las pruebas, para absolver al señor **MELGAREJO CASTRO**, en este evento, únicamente al capricho del fallador de instancias, pretenden endilgarle el delito de Concierto para delinquir, de una decisión que hizo tránsito a cosa juzgada, es una clara violación indirecta de la Ley sustancial, pues la argumentación dada en las instancias, se soportó en premisas falsas y erradas, incurriendo en desaciertos como los expresados.

Se infiere una pertenencia no probada del delito de concierto para delinquir, para crear un nexo de causalidad, para endilgarle otra conducta como es la extorsión; es decir, no existe pleno convencimiento de la responsabilidad penal de mi mandante frente a las dudas insalvables frente al injusto de concierto para delinquir y/o extorsión, es decir, dejo de aplicar el Art. 7 (de la Ley 600 y 906 del Código de Procedimiento Penal), de contera, se deja de aplicar el Art. 29 de la Carta Política, Art. 8 numeral 2 de la Convención América sobre Derechos Humanos, que resulta viable que la Corte Suprema de Justicia, declare la prosperidad del mismo, ya que el tratamiento que se le ha dado a este principio, lo ignora totalmente el Tribunal, que incluso los fallos de instancias, han reconocido la presencia de la incertidumbre, pero que sin embargo, han impartido una decisión de condena.

En este caso, los jueces de instancias, han reconocido la existencia de duda razonable originada en el haz probatorio, pero deja de aplicar el precepto sustantivo que reconoce ese hecho, como lo expuesto anteriormente.

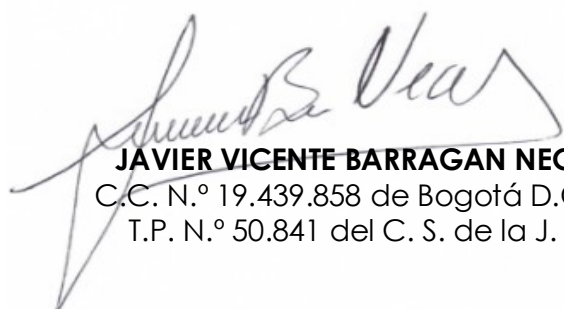
VI. DE LA FINALIDAD DEL RECURSO Y LA VIOLACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

Con el presente recurso se pretende la efectividad del derecho material y el respeto de las garantías fundamentales del señor **JAIRO MELGAREJO CASTRO** por las siguientes razones:

- 6.1. Se desconoce el derecho fundamental al debido proceso, toda vez que se violan las normas procesales relativas a la apreciación de la prueba por el sistema de la libre convicción o reglas de la sana crítica, por omisión al no ser valoradas, situación que implica para el acusado una carga que no está obligado a soportar.
- 6.2. Se desconoce igualmente el derecho fundamental de igualdad, artículo 13 de la Carta Fundamental, pues una persona puesta en las mismas condiciones de mi defendido, sometida a un juicio con la valoración probatoria adecuada, sin los errores aquí señalados, muy seguramente hubiese sido absuelta por ausencia de certeza sobre la responsabilidad, En ese orden, se acude ante el Tribunal de Casación, desvirtuada como quedó la doble presunción de legalidad y acierto del fallo con los cargos formulados, con la finalidad de que se infirme en su totalidad la sentencia impugnada.
- 6.3. Son estas, razones más que suficientes para tener por debidamente sustentada la procedencia y finalidad del recurso extraordinario de casación que aquí se propone ante la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Como consecuencia de las anteriores consideraciones, deberá infirmarse en forma total el fallo impugnado, para proferir sentencia de reemplazo en la que se absuelva al señor **JAIRO MELGAREJO CASTRO**, de los cargos imputados y por el que se le convocó a juicio, sentido en el cual solicito a los H. Magistrados de la Sala de Casación Penal se sirvan casar la sentencia.

De los Honorables Magistrados.

Atentamente,



JAVIER VICENTE BARRAGAN NEGRO
C.C. N.º 19.439.858 de Bogotá D.C.
T.P. N.º 50.841 del C. S. de la J.